

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-11434-2020
CARATULADO	: QUIDENAO/FISCO DE CHILE / CDE

Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintitrés

VISTOS.

Que a folio N° 1, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación convencional de don Hugo Enrique Quidenao Illanes, empleado, ambos domiciliados para estos efectos en Carmen N° 602, departamento 2611, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del Fisco de Chile, representado legamente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, domiciliado en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, solicitando acogerla a tramitación y condenando al demandado al pago de \$300.000.000, más intereses, reajustes legales y costas, o que en subsidio se le condene al pago de las cantidades de dinero y/o prestaciones que el Tribunal estime en equidad y justicia, debidamente reajustadas con intereses y costas.

Señala que su representado fue detenido por funcionarios de Carabineros al interior del Estadio Nacional en diciembre del año 1984, mientras jugaba fútbol en la final del campeonato nacional, siendo tomado por los brazos y lanzándolo contra el muro, además de golpearlo de manera brutal con sus lumas, uno de los cuales llegó directo en su ojo derecho partiendo su ceja y llenándosele el rostro de sangre que le imposibilitaba la visibilidad, asimismo lo tomaron del pelo y lo arrastraron varios metros pateándolo en la cabeza y en su cara, luego lo esposaron en el suelo, y uno de los funcionarios policiales le puso la rodilla sobre su cuello, provocándole asfixia, y siendo posteriormente puesto de pie al mismo tiempo que era fuertemente insultado y amenazado, en tanto preguntaba el motivo de su detención. Añade que lo condujeron esposado y pegándole en las costillas con puños y lumas, ingresándolo a un auto particular de color azul oscuro, y colocándole una bolsa en la cabeza que le impedía respirar, también iba siendo golpeado en el estómago lo que lo obligó a mantener la cabeza entre sus piernas. Indica que durante el recorrido seguía siendo golpeado cada cierto tiempo con la luma en los brazos, llegando a no sentirlos, además de no poder mover sus dedos. Agrega que antes de detenerse uno de los carabineros dijo *“si tiramos a esta concha de su madre aquí y le ponemos un tunazo en la cabeza, decimos que no lo encontramos no más”*.



Foja: 1

Refiere que fue conducido a la 18° Comisaría de Carabineros, lugar en que fue interrogado por 4 funcionarios de civil, además de ser fotografiado, señalándole que tenían conocimiento de todos sus movimientos y que nada les podía ocultar. Indica que le vendaron los ojos y lo sentaron en una silla, golpeándole sus manos con objetos contundentes lo que le provocó torceduras en sus dedos, asimismo fue golpeado en sus testículos con bastones, en el momento que se le preguntaba por su familia y conocidos, amenazándolo con ir a su casa y traer a sus hermanos menores y padres a presenciar su golpiza.

Cuenta que en la madrugada del día 23, se le trasladó a la 19° Comisaría, siempre vendado, haciéndolo ingresar por un pasillo, lugar en que recibió golpes y lumazos por todo su cuerpo por parte de varios Carabineros, mientras avanzaba ya que se encontraban ubicados en los costados de este, cayendo al suelo en reiteradas oportunidades, pero que por la intensidad de los golpes, no le era posible respirar, sentía la sangre que corría por su cara, además de sentir que dos de sus dedos de la mano derecho estaban dislocados, luego lo levantaron y lo ingresaron a un cuarto. En este lugar indica que la situación empeoró, ya que varias veces fue trasladado a una celda aislada en el cual lo esperaban funcionarios policiales para supuestamente conversar, momento en que fue nuevamente sometido a torturas, además de estar vendado mientras era golpeado en los testículos y el estómago, y además en los oídos, lugar en que se le pegaba con las manos abiertas y lo mojaban con agua helada. Relata que una mañana fue conducido con otro detenido a un jeep de Carabineros, vehículo en el que los sentaron esposados estando el motor encendido y en el piso había una ametralladora, razón por la que se les acusó de querer fugarse, lo que no era posible atendido que estaban atados, por lo que se le castigó amarrándolo de los pies con una cadena y colgándolo, posición en la cual permaneció varias horas hasta que un funcionario puso una pistola en su cabeza simulando que la dispararía. Luego señala que fue soltado y lo golpearon con un tarro de metal que hizo que perdiera el conocimiento y que una vez que se recuperó ya estaba en la celda muy desorientado, le dolía todo el cuerpo y le sangraba la nariz, añadiendo que por la noche escuchaba gritos de dolor de otros detenidos, pensando que nunca saldría de ese lugar y que lo iban a matar.

Manifiesta que se le acusó de haber infringido la Ley de Seguridad del Estado y se le puso a disposición del Ministerio del Interior. Adiciona que en la 19° Comisaría compartió la celda con el Sacerdote Denis O'Mara y que el 24 de diciembre lo visitó el sacerdote Mariano Puga, quien les llevó alimentos para la cena de Navidad, y se le dio permiso para celebrar una misa en la celda.



Foja: 1

Hace presente que el 27 de diciembre fue puesto en libertad de la 19° Comisaría, sin que el Ministerio presentara requerimiento judicial alguno en su contra, pero que de igual fue perseguido durante meses por las mismas personas, lo que ha trascendido en su memoria hasta el día de hoy, siendo el dolor y la angustia una cuestión difícil de soportar durante todos estos años, además de sufrir aun las dolencias físicas a consecuencia de los golpes que recibió.

Sostiene que su representado fue reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos por el Estado de Chile, y se encuentra incorporado en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech I.

Manifiesta que la declaración de estado de guerra interna definió como enemigos a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos políticos de izquierda del país, tomando el control de la nación las fuerza armadas y de orden, derrocando a los personeros de gobierno, y todas las personas que se relacionaban con este fueron intimadas a presentarse ante las nuevas autoridades. Asimismo diversas instituciones de educación y de trabajo, así como también asentamiento de la reforma agraria y hogares de muchas familias fueron allanadas con el fin de buscar armas. Indica que miles de personas fueron arrestadas y recluidas en distintos lugares, y que algunos de ellos se habilitaron para esos efectos. Alude a que dichas detenciones produjeron un gran impacto en los afectados y a quienes estuvieron presentes, siendo el maltrato verbal un hecho generalizado. Además señala que el despliegue desmedido de fuerza producía una inmensa sensación de indefensión, de soledad y perplejidad, lo que aumentaba con el desconcierto y temor de saber que no existía instancia alguna para reclamar en contra de las transgresiones y la arbitrariedad para obtener una reparación o restitución de los instrumentos o maquinarias de trabajo.

Añade que el quiebre de la democracia además de afectar a los detenidos y torturados, afectó a la integración social, a las oportunidades de trabajo, a la participación de todos los sectores. Hace hincapié que manera consciente o inconscientemente, se extendió una conspiración de silencio sobre la tortura de manera paulatinamente en el país. Señala que cuando se produjo el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en Chile regía la constitución del año 1925 en la cual se establecía la división de poderes, con el fin de evitar abusos en el ejercicio de sus funciones, mediante la fiscalización recíproca de sus actuaciones y la sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Refiere que una vez derrocado el gobierno elegido en el año 1970, la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el ejercicio de otros poderes a las necesidades del momento, declarándose por parte de dicha junta, que asumía el mando Supremo



Foja: 1

de la Nación, lo que significaba la concentración de todos los poderes, comprometiéndose en un comienzo a garantizar la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial, así como también el respeto a la Constitución y las leyes de la República en la medida que la situación acaecida lo permitiere. Luego del golpe militar se ocasionaron una serie de hechos como la disolución del Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, además de aplicar medidas cuya finalidad era la desarticulación de instituciones, asimismo se dio termino a los cargos de las autoridades municipales vigentes para designar alcaldes llamados a colaborar con el trabajo de la Junta, y se decretó la calidad interina de todos los funcionarios de la Administración Pública, con excepción de los integrantes del Poder Judicial y la Contraloría. Indica que se perdió la facultad de elección de dirigentes, también se sometió a control las actividades de las organizaciones sindicales, y se intervino las universidades públicas y privadas, designando a altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en calidad de rectores-delegados dotados de amplias facultades, sometién dose a una inspección los contenidos de la docencia y la programación de los canales universitarios de televisión. Indica que se implantó una estricta censura a la prensa escrita, la radio y la televisión. Aduce que el toque de queda que duró por muchos años, sustrajo del examen público las acciones de los agentes del Estado utilizados de la represión, los que estaban autorizados a circular libremente durante las horas prohibidas. Explica que operó el exilio por razones políticas, afectando a muchas personas las cuales previo a abandonar el país, fueron sometidas a prisión y tortura.

Concluye que tanto la prisión política como la tortura fueron una constante en el régimen militar, impulsada por las autoridades de aquella época, el que se diseñó y ejecutó movilizand o personal y recursos de diversos organismos públicos, además se dictaron decretos leyes y leyes que resguardaron estas conductas represivas.

Sostiene que la vida de su representado se vio forzosamente entorpecida, en tal magnitud que el cambio fue para siempre, determinada por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos que le dieron la calidad de víctima, siendo un sobreviviente de los agentes del Estado, y que sin embargo lo más grave fue que este cambio no fue voluntario, tratándose por tanto de crímenes de lesa humanidad.

Arguye que el actuar de los agentes del Estado sobrepasó los límites, transgrediendo los derechos humanos y que un Estado democrático debe indemnizar a todo ciudadano que haya sufrido los vejámenes descritos, ya sean físicos o morales ocasionados por detenciones ilegales, torturas y ejecuciones



Foja: 1

provocados por sus agentes, ya que actuar de manera contraria significaría obligarlos a soportar permanentemente este injusto.

En relación a los fundamentos de derecho, sostiene que la responsabilidad del Estado se origina en los perjuicios provocados y causados por los organismos de la administración, lo que ha sido reconocido por la Constitución Política del Estado del año 1980, y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Manifiesta que ante la ocurrencia de una calamidad o accidente que conlleve daños para las personas o las cosas, se debe establecer si el que experimenta dichos daños no le queda otra posibilidad más que sufrirlo o tiene el derecho al resarcimiento por parte de los demás, y en caso de que fuera esta última opción, debe determinarse si se acude a un sistema de auxilios o se establece un derecho subjetivo del perjudicado a reclamar de otro el precio mediante el cual valorice su menoscabo, en cuyo caso es posible afirmar que se trata de una indemnización.

Explica que existe un relativo consenso en que la función principal de la responsabilidad patrimonial es y debe ser la reparatoria o compensatoria, siendo en este sentido la reparación de los daños ocasionados, una función básica de la responsabilidad. Señala que la función compensatoria supone la intervención del derecho una vez que se ha ocasionado la situación que produce el perjuicio, renunciando a cualquier consideración de intervención previa que pudiera minimizar la ocurrencia de actos dañoso.

En relación a lo expuesto, indica que no cabe duda de que la función primordial de la responsabilidad patrimonial de la Administración, correspondiente a la responsabilidad civil, en general es y debe ser la reparación de los daños derivados de su actuar u omisión y así lo ha entendido la doctrina, siendo imposible concebir una responsabilidad extracontractual del Estado que no tenga como finalidad principal la compensación de los daños y la indemnización de las víctimas. Cita el artículo 6 de la Constitución Política de la República para indicar que los órganos del Estado deben someter su acción a dicha normativa y a las normas que se dicten conforme a aquella, así como también a garantizar el orden institucional de la República, las que rigen para todos, y cuya infracción genera las responsabilidades y sanciones que determina la Ley. Asimismo menciona el artículo 7 de la Carta Fundamental respecto a la actuación válida por parte de los órganos del Estado, y que toda contravención a ello genera la nulidad del acto originando las responsabilidades y sanciones que señale la ley. Además convoca el inciso segundo del artículo 38 del mismo cuerpo legal referido para efectos de indicar que cualquier persona lesionada en sus derechos por parte de la



Foja: 1

Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades podrá reclamar ante los Tribunales que determine la ley. Alude a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, artículos 1, 2 y 3 en cuanto a la constitución de la administración del estado, que estos deben someter su acción a las leyes y que la misma está al servicio de la persona humana. Añade que el artículo 3 inciso 2 de la Ley N° 18.575 previene que la Administración del Estado debe observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, control, etc. En relación a la responsabilidad del Estado menciona el artículo 4 de la misma ley citada, la cual establece que el Estado será responsable por los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones, y a su vez el artículo 44 que dispone sobre la responsabilidad del daño que se cause por falta de servicio.

Sostiene que en nuestro país se instaura la responsabilidad directa del Estado por los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de sus funciones, lo que se ha mantenido por la jurisprudencia. En cuanto a dicha responsabilidad ésta se contempla en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría de República.

Expone que la responsabilidad del Estado es de derecho público, y su fundamento básico se encuentra contenido en diversas disposiciones de rango supraconstitucional, constitucional y legal, además menciona lo expresado por la Excelentísima Corte Suprema en esta materia, a propósito de fallos dictados sobre este asunto.

Declara lo que la doctrina ha expresado respecto de la responsabilidad del Estado, señalando que el modelo recogido en la Constitución de 1980 se aparta totalmente de lo establecido en nuestro Código Civil, toda vez que se implementó en el ordenamiento jurídico nacional un sistema de responsabilidad que no se asienta en el dolo o la culpa del causante del daño, sino que con absoluta independencia de la ilicitud o licitud del actuar del individuo que lo produce. Abunda en lo indicado por el profesor Eduardo Soto Kloss quien aduce que la existencia de un daño ocasionado por la administración es suficiente para determinar su responsabilidad. Asimismo invoca al profesor Osvaldo Oelckers quien sostiene que la responsabilidad de la administración pública por lesión de los derechos de los administrados en razón de actos administrativos es a su entender una hipótesis que el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política considera plenamente efectiva, al señalar en su texto solo el resultado de una actuación.

Profundiza en que la responsabilidad del Estado se apoya en su nuevo criterio que es la lesión, la que se entiende como un perjuicio antijurídico en sí



Foja: 1

mismo, perjuicio que el titular de un patrimonio no tiene por qué soportar, aunque el agente u organización actúe con toda licitud.

Describe las características de la responsabilidad del Estado, la que es constitucional ya que se encuentra consagrada en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, y atiende al ejercicio de la función estatal, el que debe respetar la constitución íntegramente.

Arguye que el hecho ilícito descrito en autos es un crimen de lesa humanidad, y que dicho concepto se definió en el primer proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, señalando que corresponde a los actos inhumanos, tales como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, o persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. Indica que con el avance del derecho internacional se reconoce una vinculación del jus cogens con los delitos de naturaleza de lesa humanidad, siendo la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que albergó en el año 1969, de forma definitiva, el concepto de jus cogens. Cita el artículo 53 y 64 de dicho Convenio respecto a la imperatividad del derecho internacional.

Refiere que la sujeción entre el derecho imperativo con los crímenes de lesa humanidad fue constatado simultáneamente a través de la jurisprudencia internacional y que la Corte Internacional de Justicia en el año 1970, a propósito de un caso, reconoció la existencia para los Estados de obligaciones erga omnes en relación con los derechos fundamentales. Agrega que atendida la importancia de estos derechos, es que los Estados tiene un interés en que estos sean protegidos. Indica que en el ámbito nacional existe una regulación vigente con el objeto de entender cuando estamos frente a un delito de lesa humanidad, así como el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Congreso en el año 2009 y el que entró en vigencia el mismo año, que define este concepto en su artículo 7. Asimismo, en la Ley N° 20.357 en su Título I sobre los Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, en su artículo 1 establece que constituye este tipo de delitos.

Hace hincapié que en este asunto estamos frente a un ilícito que corresponde a un delito de lesa humanidad, y que el Estado por ende no puede eludir su responsabilidad civil por los daños irrogados, evadiendo con ello la normativa humanitaria internacional de naturaleza jus cogens.

Expone sobre la imprescriptibilidad de la acción de reparación interpuesta, indicando que los hechos relatados por la víctima, de conformidad al derecho internacional, se encuentran sujetos bajo su regulación y no por tanto por el



Foja: 1

derecho común, lo contrario significaría un incumplimiento grave por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derecho Humano, así como a sus principios generales, los que obligan a la nación a reconocer y proteger el derecho a la reparación integral. Alude a jurisprudencia emanada de tribunales de primera instancia, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema en relación a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y a la reparación de los perjuicios ocasionados.

Refiere sobre el daño moral originado por la vulneración a los derechos fundamentales, sosteniendo que respecto de este daño la mayoría de la jurisprudencia ha estimado que corresponde al sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos de una persona, tomando además el concepto de dolor en sentido amplio, consistente en el miedo, emoción, vergüenza producido por el menoscabo sufrido. Añade que la prueba de este daño, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que no es necesaria, bastando que la víctima solo acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño. Señala que en cuanto al deber de responder por los daños irrogados por la vulneración de estos derechos, en el ámbito internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo previene en su artículo 63.1.

Finaliza indicando que su representado fue víctima de detención ilegal y arbitraria, de crueles torturas, apremios físicos y psicológicos inhumanos y deliberados, siendo una víctima de trasgresiones a sus derechos humanos, además de haber sido perseguido políticamente por agentes del Estado lo que le ha generado un gran daño en cada uno de los aspectos de su vida personal y emocional y han hecho que hasta el día de hoy no tenga una vida normal pese a los esfuerzos que ha efectuado, atendido que aún le atormentan los hechos vividos.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, acogerla a tramitación y que se le condene al demandado al pago de \$300.000.000 al demandante, más intereses, reajustes legales y costas, o en subsidio condenarlo al pago de las cantidades de dineros y/o prestaciones que estime en justicia y equidad el Tribunal, debidamente reajustadas, con intereses y costas

Que a folio N° 13, comparece doña Carolina Vásquez, Abogada Procurador Fiscal (s) de Santiago del Consejo de Defensa de Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones, defensas y alegaciones que pasa a exponer.



Foja: 1

Señala que la presente demanda de indemnización de perjuicios se interpone en contra de su represando con el fin de que se le condene a pagar la cantidad de \$300.000.000, más intereses y reajustes, con costas o en subsidio el pago de los montos de dineros y/o prestaciones que el Tribunal estime, también reajustadas y con intereses más costas.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, toda vez que el demandante ya fue indemnizado. Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional. Añade que uno de los pilares en los cuales descansa esta justicia es en el dilema denominado justicia versus paz, y que tiene como fundamento la necesidad de un país tranquilo que mira sus errores del pasado y con ello pronunciarse sobre el nunca más. Indica que a su vez no debe olvidarse desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos, el que juega un rol importante en el reconocimiento de la medida de la justicia buscada por tantos años.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos grupos por sobre otros o se compensen ciertos daños y se dejen de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.

Sostiene que durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en relación a la justicia transicional, se arribó a tres objetivos principales los cuales eran a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig, en su informe final, planteó una serie de propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Señala que



Foja: 1

dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismos a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y c) reparaciones simbólicas. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, indica que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios.

Indica que en términos de costos generales para el Estado este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre del año 2019, respecto de pensiones la cantidad de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech). En cuanto a los bonos, el monto de \$41.910.643.367, por Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737 por Ley N° 19.992 y Desahucio por \$1.464.702.888 por Ley N° 19.123, además de un Bono Extraordinario Ley N° 20.874 de \$233.388.490-737, por lo que estima que a la fecha mencionada el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Señala que respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio, y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, el actor ha recibido beneficios pecuniarios amparados en dicha ley, la que estableció una pensión anual de reparación además de entregar otras ayudas en favor de las personas víctimas de violaciones



Foja: 1

a los derechos humanos individualizados en el anexo Listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas. Añade que dicha pensión anual reajutable ascendió a \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores a 75 años de edad. Asimismo señala que el demandante de forma adicional recibió recientemente el Aporte Único de Reparación Ley N° 20.874 por un monto de \$1.000.000.

Refiere a las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que tanto la Ley N° 19.234 como la Ley N° 19.992 han concedido a sus beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país el que se accede concurriendo la persona al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también se obtiene el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los derechos humanos.

Arguye que además se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física con la finalidad de superar las lesiones físicas derivadas de la prisión política o tortura, así como también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuación gratuita de los estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo menciona el caso en que un hijo o nieto de un beneficiario, siempre y cuando este último no hubiera hecho uso de este derecho, puede postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio o las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que los reglamentos tengan para esas becas. Por último se entregaron beneficios en vivienda a través del acceso a subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de



Foja: 1

reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de derechos humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio, el que ha sido reiterado y ratificado en el tiempo.

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades.

Menciona el documento denominado Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos en el que se ha expresado los programas de reparación, reconociéndose en el mismo la existencia de la problemática de exigir indemnización vía de programas de reparación y en forma paralela, el ejercer una acción civil judicialmente.

A su vez sostiene que una vez que el gobierno ha hecho esfuerzo de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las



Foja: 1

víctimas, y permitir a los mismos iniciar litigios en su contra originaría el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, además de poner en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que el segundo sistema no es fácilmente evitable, toda vez que los Tribunales podrían sobrepasar fácilmente los beneficios en relación a los entregados en un programa masivo, lo que podría generar una sensación de desilusión y un cambio de expectativas con los programas administrativos. En este mismo sentido, arguye que precisamente se busca el rechazo de nuevas peticiones de indemnización lo que conlleva a un fortalecimiento de los programas de justicia transicional, ya que de no ser así implicaría un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa referente a ello.

Concluye en que la acción deducida se funda en idénticos hechos pretendiéndose una indemnización por los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, por lo que opone la excepción de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizados el demandante.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que de acuerdo a lo relatado por el actor fue detenido entre el 23 y el 27 de diciembre del año 1984, siendo sometido a apremios ilegítimos y tortura en el marco del régimen dictatorial que regía en ese momento. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las



Foja: 1

normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguno de ellos se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente



Foja: 1

a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Que a folio N° 17, comparece don Mario Cortez Muñoz, abogado en representación del demandante, quien encontrándose dentro de plazo legal evacua el trámite de la réplica ratificando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

Respecto de la excepción de reparación integral opuesta por el Fisco señala que no se advierte de lo expuesto norma alguna que haga incompatible con la indemnización pedida por la vía judicial y que la normativa dictada con el fin de reparar a las víctimas asumida de forma voluntaria por el Estado no significan una renuncia por parte de la víctima a ejercer la presente acción. Para lo anterior cita lo resuelto en un Tribunal de primera instancia.



Foja: 1

Cita el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Asimismo menciona la Convención Americana de los Derechos Humanos la que contempla en su artículo 63.1 la garantía al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados además de establecer una reparación mediante el pago de una indemnización a consecuencia de la vulneración de los derechos.

Invoca el artículo 24 inciso primero de la Ley N° 19.123 que dispone que la pensión de reparación será compatible con cualquier otra de cualquier carácter de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, quedando de manifiesto la armonía existente entre la normativa interna y la internacional, lo que demuestra que la postura del Fisco de Chile no es la correcta. Alude a jurisprudencia que se ha pronunciado en relación a lo anterior. Indica que la Corte Suprema ha reconocido el carácter de complementario que tienen las reparaciones económicas otorgadas a través de las leyes dictadas desde la vuelta a la democracia con las indemnizaciones obtenidas por la vía judicial, sosteniéndose que el otorgamiento de pensiones por la ley N° 19.123 no impide que las víctimas obtengan compensaciones interponiendo la acción de indemnización del daño moral, desestimando las razones de considerar la reparación la reparación administrativa como excluyente de la judicial.

Refiere que la prescripción alegada por el Fisco aplicando las normas civiles a estos caso no es correcto, y conlleva además un incumplimiento por parte del Estado de la normativa internacional de derecho humanos que rigen en nuestro país. Cita diversa jurisprudencia que ha resuelto en base el criterio de no aplicar las normas civiles a estos asuntos.

Sostiene que el monto solicitado es de plena justicia, atendido que su representado fue víctima de transgresión a sus derechos humanos, lo que daño su vida personal y emocional, sin perjuicio de lo que el Tribunal resolverá finalmente sobre esta petición, asimismo los reajustes son del todo procedentes.

Reitera lo expuesto en la demanda en relación a que los hechos que fundan estos autos corresponden a crímenes de lesa humanidad y la vinculación del jus cogens con los delitos de esta naturaleza. Asimismo, insiste en lo ya expuesto en su libelo en cuanto al daño moral, citando lo entendido por la Excelentísima Corte Suprema respecto de dicho daño y que la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria ha coincidido en que este no requiere prueba. Así también indica que toda violación a los derechos humanos trae prevista la obligación de reparar el mal causado.



Foja: 1

Arguye que la responsabilidad del Estado es de Derecho Público, y que dicho principio se encuentra consagrado en el inciso 2° del artículo 38 de la Carta Fundamental, y en la Ley N° 18.575, siendo sus características que es constitucional, consagrada de modo genérico para todos los órganos del Estado y de forma específica para todos sus órganos administrativos, además de tratarse de una responsabilidad de una persona jurídica estatal, fundada en la base de la causalidad material, toda vez que la relación causal ante un daño antijurídico ocasionado por un órgano de la administración en el ejercicio de sus funciones, nace la obligación para indemnizar, como asimismo es directa, por el hecho de la persona jurídica y no por la actividad de un tercero, así como también debe ser integral, es decir que debe repararse todo el daño producido injustamente a la víctima.

Que a folio N° 19, comparece doña Ruth Israel López, abogada en representación de la demandada quien estando dentro de plazo legal evacua el trámite de la dúplica, mediante la cual reitera todas alegaciones, excepciones y defensas expuestas en la contestación, y con el mérito de ellas, solicita el rechazo de la demanda.

Reitera lo expresado en su escrito de contestación en relación a la excepción de reparación integral, toda vez que el Estado chileno adoptó una política integral de reparación en dinero, beneficios de salud, construcciones de memoriales, etc., la que no puede ser considerada como una indemnización fijada de forma unilateral ya que fue aceptada por parte del actor en cuanto al monto y a las condiciones.

En lo tocante a la excepción de prescripción indica que la Corte Suprema por más de 10 años consideró que la acción prescribía de conformidad al artículo 2330 del Código Civil. Invoca jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que se ha pronunciado al efecto.

Que a folio N° 22, se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a recaer.

Que a folio N° 32 se suspendió el término probatorio de conformidad a lo previsto en el artículo 6 de la Ley N° 21.226.

Que a folio N° 34, se reanudó el término probatorio atendido lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.379.

Que a folio N° 38, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:



Foja: 1

PRIMERO: Que a folio N° 1, comparece doña Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación convencional de don Hugo Enrique Quidenao Illanes, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda en contra del Fisco de Chile, ambos ya individualizados, solicitando acogerla a tramitación y condenando al demandado al pago de \$300.000.000, más intereses, reajustes legales y costas, o en subsidio se le condene al pago de las cantidades de dinero y/o prestaciones que el Tribunal estime en equidad y justicia, debidamente reajustadas con intereses y costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 13, comparece doña Carolina Vásquez Rojas, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 17, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual ratifica cabalmente todo lo expuesto en la demanda respecto de los hechos y el derecho y agregando otros fundamentos que pasó a explicar.

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 19, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas expresadas por su parte en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que a folio N° 22, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a versar, los siguientes:



Foja: 1

1. Efectividad que el actor hubiera sufrido detención, prisión ilegal, torturas, y apremios ilegítimos ejercidos por parte de la demandada o sus dependientes. Época y circunstancias.

2. De ser efectivo el punto anterior, si dicha conducta constituye una acción u omisión ilícita cometida con culpa o dolo por parte de la demandada o sus dependientes. Hechos y circunstancias.

3. Efectividad que la demandante sufrió los daños o perjuicios señalados en el libelo. Naturaleza, especie y monto de los mismos.

4. Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

5. Efectividad de haber operado la reparación integral, por haberse indemnizado al demandante por los hechos que demanda.

6. Efectividad de encontrarse prescrita la acción. Hechos y circunstancias.

SEXTO: Que, atendida la naturaleza jurídica de la acción incoada en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la demandante probar los fundamentos facticos o presupuestos de la acción incoada.

Probada por una parte la existencia de una situación jurídica cualquiera, es permitido a la contraria destruirla y reemplazarla por otra; pero la parte que pretende realizar este cambio debe establecer la modificación que alega. De esta forma, a quien haga una afirmación en juicio, incluso el demandado cuando niega -siempre que en esta negativa vaya envuelta una afirmación- le incumbe la prueba de los hechos en que se basa sus alegaciones.

SÉPTIMO: Que, a objeto de acreditar los fundamentos de su pretensión, la demandante generó la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

En folio 25:

1.- Copia Capítulo III (3) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto. “Con este capítulo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aspira a describir un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar” (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA Pag. 169). Este capítulo se encuentra compuesto por los siguientes títulos: Introducción, Concentración de Poderes, Declaración de Estado de Guerra, Consejos de Guerra, El Poder Judicial, El Aparato Represivo, Los Medios de Comunicación, Órganos de Denuncia Internos y Externos, La Reiterada Condena Internacional.



Foja: 1

2.- Copia Capítulo V (5) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Métodos de tortura: definiciones y testimonios. "... durante todo el régimen militar, la tortura se constituyó en una práctica habitual -si bien con grados de selectividad distintos, dependiendo del período- por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Tal como se ha establecido en pasajes anteriores de este Informe, se torturó en forma sistemática para obtener información y gobernar por el miedo, inculcando el temor profunda y duraderamente en las víctimas inmediatas y, a través de ellas, en todos quienes tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura." (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA. Pag. 225, introducción). Este capítulo se encuentra compuesto por los siguientes títulos: Introducción, Los Métodos, Violencia Sexual Contra las Mujeres.

3.- Copia Capítulo VIII (8) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Consecuencias de la prisión política y la tortura. "Las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados y en quienes presenciaron estas situaciones. El maltrato verbal a personas desarmadas fue un hecho generalizado. El despliegue desproporcionado de fuerza producía una profunda sensación de indefensión, de vulnerabilidad, desamparo e incertidumbre por tales actos." (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA. Pág.585). Este capítulo se encuentra compuesto por los siguientes títulos: El Impacto de la Detención, Las Consecuencias en las Víctimas: este título indica lo que significó para las Víctimas de Prisión Política y Tortura, las lesiones y enfermedades que se les produjeron, las consecuencias psicológicas quedadas en ellas, la tortura como experiencia traumática para la víctimas, las consecuencias en las relaciones familiares de las víctimas, las consecuencias en la vida sexual de las víctimas, las consecuencias en los niños y las consecuencias psicosociales de las víctimas, y por último el título Trauma y Duelo.

4.- Copia de informe denominado "La tortura, modelo de intervención", emitido el año 2005 por la Fundación de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas.

5.- Copia de Informe denominado: -Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

6.- Copia de extracto de nómina de presos políticos y torturados, en la que se encuentra destacado con el número 7032. Quideno Illanes, Hugo Enrique.

En folio 31:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EDDFXDGVXXX

Foja: 1

7.- Copia extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, específicamente el Capítulo II Título II.

8.- Copia presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, en el cual señala las Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos.

9.- Copia, presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador Especializado del Equipo PRAIS, en el cual señala la Transgeneracionalidad del daño generado a víctimas de violación a los Derechos Humanos.

10.- Copia, conferencia Internacional denominada Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, del Ministerio de Salud de Chile.

11.- Copia, informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar. Caso: D. Hernán Díaz Jiménez, elaborado por PRAIS y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

12.- Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltran P.

13.- Copia, informe denominado, Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.

14.- Copia, informe denominado Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, realizado por la Vicaria de la Solidaridad. (Programa de salud).

15.- Copia, informe, sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia, entre otros.

16.- Copia, informe denominado: Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad.



Foja: 1

17.- Copia, informe denominado: Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa.

18.- Copia, informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado: Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas.

19.- Copia, estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Rizzo y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo).

20.- Estudio Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación, realizado por doña Elisa Neumann, psicóloga y por don Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC.

21.- Monografía denominada Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política, realizada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

22.- Estudio denominado Trauma Político y Memoria Social realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

23.- Ponencia denominada Tortura y Trauma Psicosocial, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS, integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT).

24.- Estudio denominado Consecuencias Psicosociales de la Represión Política, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.

25.- Monografía denominada Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura, realizado por María Teresa Almaraz, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

26.- Monografía denominada Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.



Foja: 1

27.- Estudio denominado las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional.

28.- Extracto de la Nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en el que se encuentra el demandante.

En folio 33:

29.- Informe psicológico respecto de Hugo Enrique Quidenao Illanes, emitido por la psicóloga Carolina Canales Cortes.

OCTAVO: Que, por su parte, el demandado no produjo prueba alguna en orden a acreditar los fundamentos de su defensa.

NOVENO: Que, entrando al fondo del asunto discutido en autos y sometido a decisión de esta magistratura y en cuanto a la efectividad de existir un hecho ilícito del Estado o sus agentes, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los derechos humanos y esenciales de personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior ha sido fallado por diversos tribunales que han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas, cuyas ideas o actividades, contravenían las órdenes dadas e impartidas por el gobierno de aquel entonces. A mayor abundamiento tales hechos no han sido discutido en este proceso por la partes y por tanto es pacífico, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito.

A mayor abundamiento, del mérito de los instrumentos agregados a folio 25, 31 y 33, a los que se les otorga pleno valor probatorio, como copias de instrumento público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil, es claro que el actor fue víctima de torturas, vejámenes, y diversos maltratos cometidos por Agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, evidentemente existió una repercusión efectiva en la vida del demandante, en la forma que manifestó en su libelo. De los instrumentos que obran en el proceso, los que no fueron objetados, ni desvirtuados por prueba rendida en contrario por el demandado Fisco de Chile, puede determinarse con



Foja: 1

exactitud que en diciembre de 1984, mientras jugaba fútbol en la final del campeonato nacional, para posteriormente ser golpeado en reiteradas ocasiones y trasladado en un vehículo particular a la 18° Comisaría de Carabineros, lugar en que fue interrogado, fotografiado y nuevamente golpeado. Posteriormente fue trasladado a la 19° Comisaria de Carabineros, lugar donde nuevamente fue golpeado y torturado. Asimismo se puede establecer que el actor fue procesado por infracción a la ley 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado.

DÉCIMO: Que, encontrándose acreditada la responsabilidad objetiva del Estado de Chile y la forma en que su actuar por medio de sus órganos afectó la vida del actor, es importante tener en vista que tal como lo señalara Norberto Bobbio –doctrina que esta magistratura hace suya-, las normas jurídicas no existen nunca solas, sino siempre en un contexto de preceptos que tienen entre sí relaciones particulares, lo que se acostumbra a denominar ordenamiento, y al que suele definírsele como el conjunto unitario y coherente de normas que rigen en un cierto momento, dentro de un ámbito espacial determinado. En tal sentido es que las normas jurídicas que lo componen, deben estar vinculadas unas con otras coordinada o subordinadamente. Además, los principios generales del derecho o el “espíritu general de la legislación” en los términos del artículo 24 del Código Civil, forman parte del ordenamiento jurídico, viven en su interior e informan sus normas e instituciones. De ahí entonces, es que además del derecho interno, nuestro ordenamiento jurídico positivo tiene vinculaciones con el derecho internacional, mismo que ha analizado y se ha pronunciado sobre las implicancias de los hechos que importan la infracción y violación a los derechos humanos, muchos de cuyos textos ya han sido citados por las partes y que en ninguno de ellos se excluye la aplicación del derecho nacional o interno. En el caso de marras, el actor invoca tanto las normas establecidas en la Constitución Política de la República, como artículos de la Ley 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, unidas a las disposiciones contenidas en la Convención de Ginebra y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al efecto, es menester tener presente que el derecho interno de cada Estado, no ha sido excluido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –normativa aplicable a casos como el de autos- sino que es reconocido en su propio preámbulo, remitiéndose a él con el propósito de consolidar en los Estados Americanos, la defensa y respeto de los derechos esenciales del hombre que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Así, expresamente señala que tiene “justificación la protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el



Foja: 1

derecho interno de los Estados Americanos (sic) ". Luego, la normativa que contempla la citada convención se expone como coadyuvante y complementaria al derecho interno de cada estado miembro, sin excepción. Por su parte el artículo 1 consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y a su vez el Capítulo VIII de la Convención, que regula la organización, composición y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63 N°1, dispone que cuando -esa Corte- decida que hubo violación de un derecho o libertad protegida, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá asimismo, siempre que fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es así que esta norma acepta y contempla, entre las competencias de la Corte Interamericana y siempre que fuera procedente, se reparen las consecuencias y el pago de una justa indemnización, es decir, es una norma que fija las potestades de esa Corte para cuando conozca en un juicio determinado.

Dicho lo anterior, es menester señalar que el derecho público interno chileno, es el que justamente permite a este sentenciador conocer y pronunciarse sobre el caso de marras, y que le da la posibilidad al actor de accionar y tramitar conforme al procedimiento común ordinario contenido en el Código de Procedimiento Civil, por lo que no se advierte norma alguna que, por tratarse de asuntos de violación a los derechos humanos como fuente de la acción, se vea limitada su competencia ni las facultades que la Ley y la Constitución Política de la República le han conferido, teniendo plena potestad para dar aplicación a la normativa interna, tanto procesal como de fondo. A mayor abundamiento, es precisamente el Código Civil el que entrega por ejemplo, las reglas aplicables en cuanto a la interpretación de las normas, la carga de la prueba y la valoración de ellas frente a un caso determinado.

En consecuencia y por mucho que se trate de una acción indemnizatoria por causa de violación de derechos humanos, no puede perderse de vista que estamos ante un Estado de Derecho, y por ello, existiendo normativa vigente expresa en el ordenamiento jurídico, sea de fuente nacional o supranacional, nada impide al juez su aplicación, pues quien pretenda lo contrario en un caso determinado, ha de hacerlo por medio de otras acciones y ante otras instancias. El hecho de no actuar los Tribunales conforme a lo que se viene diciendo en materia de juicios que involucren infracciones a derechos fundamentales del hombre, sería



Foja: 1

justamente volver a épocas pretéritas, donde tal Estado de derecho, o bien no existía, o no era respetado.

DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto de lo anterior, el Fisco de Chile debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, alegó como defensa y excepción, en primer lugar, que el demandante habría obtenido una reparación integral de sus perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, por medio de la entrega de una pensión no contributiva como exonerado político pagadera por la Dirección de Previsión de Carabineros, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras.

Resulta necesario tener en consideración, que la acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado incoada en autos, tiene por objeto reparar a quienes sufran perjuicios como consecuencia del actuar de funcionarios estatales, y en este sentido, es nuestro derecho interno el que regula la indemnización en sede extracontractual de todo daño que sufra una persona, sin distinción alguna, sin perjuicio de la necesidad de probar, en cada caso, la existencia efectiva de los perjuicios que sean consecuencia del hecho dañoso, especialmente según el estatuto de las normas contenidas en los artículos 2.314, 2.316 y 2.329 del Código Civil. En tanto, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado, constituyen a juicio de este sentenciador más bien beneficios sociales tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile, referentes a la dignificación de las víctimas, la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas y la obtención, en definitiva, de una democracia plena. Entenderlo de otra forma, no sería coherente, por ejemplo, con las características de los beneficios que otorgan, los cuales quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como la edad o al hecho de estar o no cursando estudios superiores. En consecuencia, las reparaciones en dinero y aquellas denominadas como “simbólicas”, obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar los beneficiarios de las pensiones de las citadas leyes, no resultan vinculantes para la procedencia de la indemnización civil, puesto que obedecen más bien a razones gubernamentales presupuestarias que se tuvieron en cuenta al dictar la ley y no a la existencia o no de responsabilidad y de perjuicios, lo que ha de determinarse



Foja: 1

por sentencia judicial y no por dicha Ley, razón por la cual se desestimará completamente dicha defensa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en segundo lugar y en forma subsidiaria, la demandada planteó como defensa y opuso como excepción, la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber transcurrido a su juicio, con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, contados desde la fecha en que habría ocurrido la detención, privación de libertad y torturas sufridas por el demandado, entendiendo suspendida la prescripción, durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de lo anterior, invocó el plazo de 5 años contemplado en el artículo 2.515 del Código de Bello, desde que se hizo exigible el derecho a indemnización, en ambos casos hasta la fecha de notificación de la demanda, hecho acaecido el día 6 de noviembre de 2020. Refuerza su defensa afirmando que, el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existiría tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad, respecto del caso sublite. Es necesario tener presente que esta argumentación coincide, con la elaborada por parte del Consejo de Defensa del Estado en otras causas relativas a violaciones de derechos humanos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en el caso de marras, el fundamento de la acción indemnizatoria civil deriva de un delito catalogado como crimen de lesa humanidad, cometido por funcionarios estatales atentando contra los derechos inherentes a la persona humana, con el monopolio del ejercicio de la fuerza amparado en las normas de orden público vigentes a la época, para cuya protección tiene ahora como respuesta, la aplicación de las normas y principios que conforman el Derecho Internacional que haya sido ratificado por Chile y que en tal condición, se entiende incorporado al derecho interno chileno. Así, y si bien se incorpora entonces, en forma expresa la imprescriptibilidad de la acción persecutora por delitos según la calificación precedentemente señalada, no es menos cierto que ninguno de los cuerpos normativos del derecho internacional que regulan la materia, ha entregado en forma alguna el mismo carácter de imprescriptibilidad a la acción civil resarcitoria, para poder ser incorporarla y hacer aplicación de ella por parte los juzgadores civiles chilenos.

En este sentido cabe preguntarse entonces si el derecho internacional estableció expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal, por tratarse de delitos de lesa humanidad que comprometen el interés público que de ellos deriva



Foja: 1

y por ser inherentes a toda persona humana, por qué no reguló de igual manera a la acción civil de reparación. La explicación, a juicio de este sentenciador, se contiene en que la acción civil de indemnización de perjuicios apunta a un aspecto patrimonial de la reparación, que no es propia ni inherente al interés público comprometido en los hechos de lesa humanidad. A mayor abundamiento, resulta de público conocimiento que las distintas Cortes Internacionales cuando han entrado en conocimiento de las materias que le han sido reclamadas en la esfera de sus competencias, lo han hecho en aquellas demandas que dicen razón con aspectos de tal relevancia, que han decidido ejercer su jurisdicción, a pesar que gozan de la facultad de determinar qué demandas son de su interés y cuales entran a conocer, precisamente en consideración a la relevancia pública internacional que ello implica. Así, en estos términos, las acciones que buscan únicamente un resarcimiento patrimonial de los afectados, si bien pueden resultar atendibles por la naturaleza de los hechos que le resultan de antecedente, no tienen ni el carácter ni la relevancia suficiente para ejercer jurisdicción, por lo cual, son siempre de conocimiento exclusivo de cada legislación interna.

Tampoco puede pasar inadvertido a este sentenciador, la existencia de normas expresas en el ordenamiento jurídico chileno que establecen la prescripción de las acciones civiles que pueden deducirse por toda persona ante un Tribunal que tenga competencia para ello, especialmente atento a que no existe norma internacional que lo limite, siendo imperativo a todo Juez la aplicación de la prescripción, una vez invocada por quien la pretende y siempre, por cierto, cuando se den los supuestos que la Ley impone y autoriza para ello. Esto, sin dejar de tener presente la finalidad de dar certeza jurídica que tiene la institución que se analiza, la que en todo caso, también importa obtener la paz social de todos los involucrados. En este mismo orden de ideas, es menester reiterar que es el artículo 63 de la Convención Americana de Derecho Humanos, la que establece dentro de la competencia de la Corte Interamericana, la posibilidad, en caso de ser procedente, del pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Sin embargo, nada dice respecto de la imprescriptibilidad de la acción de reparación civil.

Por lo tanto y con todo lo ya razonado en este considerando, es que se afirma por esta magistratura que no hay sustento normativo, ni nacional ni internacional, para no dar aplicación en autos, a la prescripción de la acción civil reparatoria intentada.

DÉCIMO CUARTO: Que, en ese mismo orden de ideas, lo que en autos intenta el actor, como ya se ha mencionado, es una acción de naturaleza civil ante



Foja: 1

este Juzgado de dicha competencia, particularmente la acción de indemnización de perjuicios de daño patrimonial y extrapatrimonial –moral- por responsabilidad extracontractual, en este caso del Estado de Chile, teniendo aplicación además de los otros cuerpos normativos ya citados, las disposiciones del Código Civil ya indicadas en la motivación octava, que establecen el principio de responsabilidad e indemnización de todo daño o perjuicio producido por un delito o cuasidelito. En ese sentido, no es dable pretender ampararse en un instituto jurídico para demandar, como la responsabilidad extracontractual civil del Estado y pretender extraerse de algunas de sus consecuencias que no le resultan beneficiosas al actor, como lo es la prescripción bajo las normas del derecho interno civil. Dicho de otro modo, acciona el actor conforme a las reglas de competencia de orden público interno y sin embargo, además de no existir norma expresa de imprescriptibilidad en tratados o normas internacionales, pretende que se desatienda la normativa que por mandato constitucional, está llamada a aplicar.

DÉCIMO QUINTO: Que, constituye un principio general del derecho, la prescriptibilidad de las acciones, fundado en la necesidad de garantizar la estabilidad, seguridad y certeza jurídica, que encuentra sustento legal en el artículo 2.332 del Código Civil respecto de la prescripción de la responsabilidad extracontractual. Aquella disposición nos indica, que las acciones que concede aquel título -XXXV de los delitos y cuasidelitos- por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. Las normas de prescripción que contiene el Código Civil, resultan aplicables a favor y en contra del Estado, según reza el artículo 2.497 del mismo cuerpo normativo, por lo cual deben ser aplicadas en el caso sub lite, toda vez que justamente se persigue la responsabilidad civil del Estado, no existiendo norma en contrario en otra disposición legal.

En este sentido, considerando que la detención y posterior liberación de Hugo Enrique Quidenao Illanes transcurrió durante el mes de mayo del año 1984, y teniendo en consideración las disposiciones legales recién citadas, acogiendo, por otro lado, la teoría elaborada por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia de fecha 21 de enero del 2013, causa Rol N° 2182-1998, que atenúa la aplicación irrestricta de ellas y considera que los titulares de la acción indemnizatoria no se encontraban en condiciones de haberla ejercido, en tanto no exista la información necesaria y pertinente para hacer valer ante Tribunales de Justicia su derecho al resarcimiento por el daño sufrido, así como su condición de víctima, lo que se debe entender producido el día en que se constituye el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, esto es, el día 4 de marzo



Foja: 1

del año 1991, tenemos en consecuencia que, a la fecha de interposición de la demanda y más aún, a la fecha de notificación de la misma, ha transcurrido con creces el plazo para que proceda la prescripción extintiva de la acción, razón por la cual debe necesariamente ser acogida la excepción opuesta, como se dispondrá en lo resolutivo del fallo.

DÉCIMO SEXTO: Que, en virtud de lo que ya se viene razonando, este sentenciador no emitirá pronunciamiento respecto de los daños reclamados, por resultar inoficioso e incompatible con lo ya resuelto.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo analizado precedentemente, atento con los hechos acreditados y suficientemente relatados en las motivaciones anteriores, tuvo motivo más que plausible para litigar en estos autos, en conformidad con el artículo 144 del Código Adjetivo Civil, por lo que no se le condenará al pago de las costas generadas en la presente causa, las que serán soportadas por ambas partes.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1.700, 1.706, 1.71, 2314, 2.316, 2.329, 2.332, 2.492, 2.514, 2.515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

I.- Que, **SE ACOGE** la excepción de prescripción opuesta por la demandada, conforme lo razonado en los motivos pertinentes, y en consecuencia se rechaza la demanda de folio 1; rechazándose en todo caso las demás defensas deducidas por la parte demandada;

II.- Que, cada parte pague sus costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Pronunciada por doña Karina Portugal Cuevas, Jueza Suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.



C-11434-2020

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de Febrero de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EDDFXDGVXXX